

No. 28515

**ARGENTINA
and
PARAGUAY**

**Agreement on the restitution of motor vehicles. Signed at
Itzaingó, Argentina, on 26 April 1989**

Authentic text: Spanish.

Registered by Argentina on 2 December 1991.

**ARGENTINE
et
PARAGUAY**

**Accord relatif à la restitution de véhicules à motenr. Signé à
Itzaingó (Argentine) le 26 avril 1989**

Texte authentique : espagnol.

Enregistré par l'Argentine le 2 décembre 1991.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO SOBRE RESTITUCIÓN DE AUTOMOTORES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ARTICULO I

En virtud del presente Convenio queda establecido que el vehículo automotor terrestre originario o procedente de una de las Partes que haya ingresado en el territorio de la otra Parte no acompañado de la respectiva documentación comprobatoria de propiedad y origen será secuestrado y de inmediato entregado a la custodia de la autoridad aduanera local.

Para los efectos del párrafo anterior, el secuestro del vehículo originario o procedente de una de las Partes se efectuará: a) como consecuencia de orden judicial requerida por el propietario del mismo, subrogatario o su representante; b) de la acción de control de tráfico realizada por las autoridades policiales o aduaneras de la otra Parte.

ARTICULO II

1. Toda persona física o jurídica que desee reclamar la restitución de vehículo de su propiedad formulará su pedido a la autoridad judicial del territorio en el que el mismo se encuentre, pudiendo hacerlo directamente, por su representante, subrogatario, procurador habilitado o a través de las autoridades competentes de la Parte de la cual sea nacional o en la que tenga su domicilio. La reclamación deberá formularse dentro del plazo de TREINTA (30) meses de efectuada la denuncia policial correspondiente. Vencido dicho plazo, prescribe su derecho de hacerlo de conformidad con el procedimiento establecido en este Convenio.
2. El pedido de restitución será formalizado con la documentación abajo descripta, legalizada por el Consulado del país de la autoridad judicial requerida o por el Consulado del país reclamante, situado en el país de la autoridad judicial requerida según el caso:
 - a) Título de propiedad del automotor; b) parte policial del robo o sustracción del vehículo en el país de origen; c) en caso de compañías de

- seguro, certificado de pago o cesión de derechos del propietario; deberá además depositar a la orden del Juzgado, a título de garantía procesal, QUINIENTOS (500) dólares estadounidenses o su valor equivalente en moneda local, en la fecha del depósito. A estos fines serán aceptados depósito en efectivo, fianza bancaria, póliza de seguro o garantías reales sobre inmuebles.
3. El reclamante solicitará personalmente o por procurador, a la autoridad judicial del territorio en que el vehículo se encuentre, su búsqueda y secuestro, en base a la documentación presentada e individualizará, cuando pueda, a la persona que lo tiene, proporcionando nombre y dirección.
 4. Recibido el pedido, el Juez ordenará el inmediato secuestro del vehículo a su entrega a la custodia de la autoridad aduanera local. El depósito del vehículo será hecho mediante inventario y, en ningún caso, podrá el mismo ser entregado a cualquiera de las partes litigantes, ni a un tercero, en carácter de depositario judicial.
 5. Una vez secuestrado el vehículo, el Juez notificará a la persona demandada, para que, en el plazo improrrogable de TRES (3) días hábiles, presente los documentos de origen que certifiquen su derecho sobre el mismo. No serán admitidos otros tipos de pruebas que no sean los documentos de importación del vehículo y los documentos de exportación del mismo, expedidos por la Aduana del país de origen, en forma óbida y legal.
 6. Sin que afecte el curso del proceso, el Juez solicitará a la autoridad aduanera, para que responda en el plazo de veinte días informaciones sobre el ingreso del vehículo.
 7. Vencido el plazo del que trata el parágrafo cinco, el proceso será tramitado en forma sumaria y el Juez resolverá, por sentencia, la entrega del vehículo a quien tenga derecho.
 8. Al presente procedimiento de recuperación de vehículos se dará la más estricta celeridad de acuerdo con la legislación vigente de la Parte en que se tramita el mismo. La autoridad judicial imprimirá a las diligencias la rapidez necesaria. No se admitirá otro tipo de defensa además de las establecidas en el presente Convenio, ni prácticas dilatorias, debiendo el Juez, en todos los casos subsanar los defectos de procedimiento de la mejor manera posible, en beneficio de las Partes.

9. Una vez firme la sentencia que haga lugar al pedido, el Juez ordenará la devolución del vehículo al propietario, al subrogatario o a su representante, directamente o por intermedio de las autoridades consulares, aduaneras o policiales de la Parte de que él sea nacional.

ARTICULO III

1. El vehículo automotor terrestre originario o procedente de una de las Partes, secuestrado, encontrado por las autoridades de la otra Parte o denunciado como contrabando por cualquier persona, sin documentación comprobatoria de propiedad y origen, será, de inmediato, entregado a la custodia de la autoridad aduanera del territorio en el cual fue localizado, mediante la redacción de un acta de entrega e inventario.
2. Recibido el vehículo, la autoridad aduanera solicitará por escrito a la autoridad consular de la otra Parte, en un plazo de TRES (3) días, informaciones sobre registro policial de hurto o robo del vehículo en el territorio de procedencia para obtener respuesta en un plazo de VEINTE (20) días. La autoridad que reciba la consulta se obliga, además, a notificar al presunto propietario del vehículo sobre su secuestro en el territorio de la otra Parte, instruyéndolo sobre cómo proceder para su recuperación. La inobservancia de estos requisitos anulará todas las decisiones posteriores.
3. Sin perjuicio de la consulta mencionada en el párrafo anterior, la autoridad aduanera procederá a la publicación por CINCO (5) veces en DIEZ (10) días, en órgano oficial y en un diario de gran circulación del país, de edictos para que los interesados ejerzan sus derechos en el plazo de DIEZ (10) días contados de la fecha de la última publicación. En esos avisos serán consignadas todas las características identificatorias del vehículo, como marca, modelo, color, números de motor y chasis, etc.
4. Recibida la respuesta formal confirmando el origen delictuoso del vehículo, se suspenderán los trámites por un plazo de VEINTE (20) días, durante el cual el propietario o subrogatario, su representante, el procurador habilitado o la autoridad consular de la Parte de que sea nacional, presentará la documentación pertinente. Recibida la documentación, la autoridad aduanera procederá, en el plazo de CINCO (5) días hábiles, a la entrega del vehículo al propietario, al subrogatario o su representante, directamente o por intermedio de las autoridades

consulares, aduaneras o policiales de la Parte de que él sea nacional, y expedirá al interesado el correspondiente certificado.

5. En el caso de no haber respuesta formal en el plazo de VEINTE (20) días y no habiendo los interesados ejercido oportunamente sus derechos en cuanto al vehículo en custodia, la autoridad aduanera adoptará las medidas correspondientes establecidas en el respectivo código aduanero.
6. Si cualquier acto o decisión de autoridad administrativa fuere sometido a la autoridad judicial competente, el proceso se registrará por las normas previstas en el presente Convenio.

ARTICULO IV

La resolución de primera instancia será apelable dentro del plazo improrrogable de TRES (3) días hábiles, debiendo elevarse los autos a la instancia superior, sin más trámite, para que en ésta se decida en definitiva dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles.

ARTICULO V

Siempre que existiera indicio de adulteración de los números o de sustitución de los componentes identificatorios de un vehículo, el Juez deberá solicitar el concurso de un perito, sin perjuicio de la facultad de las Partes de proponer, igualmente, sus peritos respectivos. Deberán ser propuestos peritos matriculados, quienes podrán ser habilitados por la empresa fabricante del vehículo objeto de la pericia. En todos los casos, los peritos expedirán sus respectivos informes dentro del plazo de TRES (3) días hábiles. Tales informes deberán basarse en los datos de identificación aportados por la empresa fabricante del vehículo, que serán presentados al Juez legalizados por el Consulado del país de origen del vehículo.

ARTICULO VI

Queda entendido que todos los plazos previstos en este Convenio son considerados como plazos procesales de carácter judicial.

Para los plazos no previstos en este Convenio registrarán, en todos los casos, los más breves de la legislación de la Parte en que se tramita el proceso.

ARTICULO VII

Toda medida judicial o administrativa sobre robo o hurto de vehículos originarios o procedentes del territorio de una de las Partes y localizados en el de la otra, en proceso a ser promovida a partir de la fecha de vigencia del presente Acuerdo se regirá por estas disposiciones.

ARTICULO VIII

El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que ambas Partes se hayan comunicado mutuamente el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales necesarios para la aprobación del mismo. Cada Parte podrá denunciarlo por vía diplomática. La denuncia surtirá efecto el último día del mes siguiente al de la notificación a la otra Parte.

HECHO en Ituzaingó, Provincia de Corrientes, República Argentina, a los veintiséis días del mes de abril de mil novecientos ochenta y nueve, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno
de la República Argentina:

[Signed — Signé]

DANTE MARIO CAPUTO

Por el Gobierno
de la República del Paraguay:

[Signed — Signé]

LUIS MARIA ARGANA

[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT¹ BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF ARGENTINA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF PARAGUAY ON THE RESTITUTION OF MOTOR VEHICLES*Article I*

By virtue of this Agreement, it is established that motor vehicles originating in or proceeding from the territory of one of the Parties, which have entered the territory of the other Party unaccompanied by documents establishing their ownership and origin shall be impounded and immediately placed in the custody of the local customs authority.

For the purposes of paragraph 1 above, the impounding of vehicles originating in or proceeding from the territory of one of the Parties shall take place: *a*) under a judicial order requested by the owner of the vehicle or his surrogate or representative; *b*) as a result of a traffic check carried out by the police or Customs authorities of the other Party.

Article II

(1) Individuals or corporate bodies claiming restitution of a vehicle as being their property shall petition the judicial authority of the territory in which the vehicle is located, either directly or through a representative, surrogate or duly authorized agent, or through the competent authorities of the Party of which they are nationals or in the territory of which they have their domicile. The claim shall be submitted within a period of thirty (30) months after the relevant police report has been filed. Upon expiration of this period, their right to submit such a claim under this Agreement shall lapse.

(2) The petition for restitution shall be accompanied by the following documents, authenticated by the consulate of the country of the judicial authority receiving the claim or, as the case may be, by the consulate of the claimant's country in the country of the judicial authority receiving the claim:

(a) Title of ownership of the vehicle;

(b) A police report of the theft or removal of the vehicle in the country of origin;

(c) In the case of insurance companies, a certificate of payment or transfer of rights of ownership. There shall also be deposited on order of the court, as bond for legal costs, five hundred (500) US dollars or their equivalent in local currency at the time of such deposit. Cash, bank letters of credit, insurance policies or collateral in the form of real estate shall be acceptable for this purpose.

(3) The claimant shall, personally or through his agent, petition the judicial authority of the territory in which the vehicle is located to trace and impound it on the basis of the documents submitted and, where possible, shall furnish the name and address of the person in possession thereof.

¹ Came into force on 30 October 1990, as soon as the Parties had informed each other (on 30 November 1989 and 30 October 1990) of the completion of their required constitutional procedures, in accordance with article VIII.

(4) On receipt of the petition, the judge shall order the vehicle to be impounded forthwith and placed in the custody of the local customs authority. The impounding of the vehicle shall be based on an inventory and in no circumstances shall it be surrendered to either of the litigants or to any third person as depositary.

(5) Once the vehicle has been impounded, the judge shall order the defendant to submit, within no more than three (3) working days, the documents establishing its origin and certifying that the defendant has title to the vehicle. No other type of evidence shall be admissible except the import documents relating to the vehicle and the export documents delivered by the customs authority of the country of origin, established in due and legal form.

(6) Without prejudice to the course of the proceedings, the judge shall request the customs authority to provide within twenty (20) days information regarding the entry of the vehicle.

(7) Upon expiry of the period referred to in paragraph (5), the case shall be tried by summary procedure and the judge shall order the vehicle to be handed over to the Party found to have title to it.

(8) The procedure for the restitution of the vehicle shall be implemented as rapidly as possible under the legislation of the Party in whose territory it is applied. The judicial authority shall ensure that the formalities are carried out with the necessary speed. No form of defence other than that established in this Agreement, and no delaying tactics, shall be permitted, and in every case the judge shall rectify any procedural difficulties in the best possible manner, in favour of the Parties.

(9) Once his decision has become executory, the judge shall order the restitution of the vehicle to the owner, his surrogate or his representative, directly or through the consular, customs or police authority of the Party of which he is a national.

Article III

(1) Any motor vehicle originating in or proceeding from the territory of one of the Parties, impounded or found by the authorities of the other Party, or reported as contraband by any person shall, in the absence of documents certifying its ownership and origin, immediately be placed in the custody of the customs authority of the territory in which it was found and a certificate of transfer and inventory shall be made out for it.

(2) Upon receipt of the vehicle, the customs authority shall request in writing within three (3) days the consular authority of the other Party to provide information within twenty (20) days regarding any police record of the theft of the vehicle in the territory in which it originated. The authority so requested shall also be required to inform the presumed owner of the vehicle that it has been impounded in the territory of the other Party, and to inform him of the procedure for recovering it. Failure to comply with these requirements shall render all subsequent decisions null and void.

(3) Without prejudice to the consultation mentioned in paragraph 2, the customs authority shall, five (5) times in a period of ten (10) days, place notices in an official gazette or in a widely circulated national newspaper calling upon those concerned to avail themselves of their rights within ten (10) days of the date of the last such notice. The notices shall specify all the identifying characteristics of the vehicle, such as its make, model, colour, engine and chassis numbers, etc.

(4) Upon receipt of the formal reply confirming the unlawful provenance of the vehicle, the proceedings shall be suspended for a period of twenty (20) days, during which the owner or his surrogate, his representative, his duly authorized agent or the consular authority of the Party of which he is a national shall submit the relevant documents. Upon receipt of the documents, the customs authority shall deliver within five (5) working days the vehicle to its owner, surrogate or representative, directly or through the consular, Customs or police authorities of the Party of which he is a national, and shall issue the appropriate certificate to the person concerned.

(5) In the absence of a formal reply within twenty (20) days, and in case of failure by the persons concerned to avail themselves within the prescribed time-limit of their rights with regard to the vehicle held in custody, the customs authority shall take the appropriate steps prescribed by the respective customs code.

(6) Should any action or decision by an administrative authority be brought before the competent judicial authority, the proceedings shall be governed by provisions of this Agreement.

Article IV

The ruling of first instance may be appealed within not more than three (3) working days. If so, the records of the case shall be transmitted to the higher court without further formalities, in order that a final determination may be made within five (5) working days.

Article V

Where there are indications that serial numbers have been tampered with or that identifying parts of a vehicle have been replaced, the judge shall request the assistance of an expert, without prejudice to the right of the Parties to propose their own experts. The experts proposed must be licensed, and may be authorized by the manufacturer of the vehicle to be inspected. In all cases, the experts shall submit their respective reports within three (3) working days. The reports must be based on the identification data furnished by the manufacturer of the vehicle, which shall be submitted to the judge after authentication by the consulate of country of origin of the vehicle.

Article VI

It is understood that all time-limits specified in this Agreement shall be considered as procedural time-limits prescribed by law.

Where not specified in this Agreement, time-limits shall, in all cases, be the shortest provided for in the legislation of the Party in which the proceedings are conducted.

Article VII

Any judicial or administrative procedures regarding the theft of vehicles originating in or proceeding from the territory of one of the Parties and located in the territory of the other Party, that are in progress on the entry into force of this Agreement or are initiated subsequently shall be governed by its provisions.

Article VIII

This Agreement shall enter into force once each Party has notified the other of the completion of its constitutional procedures required for approval. Each Party may subsequently terminate the Agreement by notification given through the diplomatic channel. Such notification shall take effect on the last day of the month following its reception by the other Party.

DONE at Ituzaingó, Province of Corrientes, Republic of Argentina, on 27 April 1989, in two originals, both being equally authentic.

For the Government
of the Republic of Argentina:

[Signed]

DANTE MARIO CAPUTO

For the Government
of the Republic of Paraguay:

[Signed]

LUIS MARÍA ARGAÑA

[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD¹ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
D'ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU PARAGUAY RELATIF À LA RESTITUTION DE VÉHICULES
À MOTEUR

Article premier

En vertu du présent Accord, il est établi que les véhicules automoteurs terrestres, originaires ou provenant de l'une des Parties, qui ont pénétré sur le territoire de l'autre sans être accompagnés de documents attestant leur propriété et leur origine seront saisis et remis immédiatement à la garde de l'autorité douanière locale.

Aux effets du paragraphe précédent, la saisie des véhicules originaires ou provenant de l'une des Parties s'effectuera : *a*) comme suite à une ordonnance judiciaire rendue à la demande du propriétaire du véhicule, de toute personne se substituant à lui ou de son représentant; *b*) comme suite à une action de contrôle du trafic menée par les autorités policières ou douanières de l'autre Partie.

Article II

1. Toute personne physique ou morale qui désire demander la restitution d'un véhicule lui appartenant adressera sa demande à l'autorité judiciaire du territoire sur lequel se trouve le véhicule, directement, par l'intermédiaire de son représentant, de toute personne se substituant à lui, de son avocat ou par l'intermédiaire des autorités compétentes de la Partie dont il est un national ou sur le territoire de laquelle il a son domicile. La réclamation devra être formulée dans un délai de trente (30) mois après le dépôt de la plainte pertinente à la police. Passé ce délai, le droit de réclamation est prescrit conformément aux dispositions du présent Accord.

2. La demande de restitution du véhicule sera présentée officiellement, accompagnée des documents décrits ci-après, légalisés par le Consulat du pays, de l'autorité judiciaire requise ou par le Consulat du pays réclamant situé dans le pays de l'autorité judiciaire requise, selon le cas:

- a*) Certificat de propriété du véhicule automoteur;
- b*) Aspects policiers du vol ou de l'enlèvement du véhicule dans le pays d'origine;
- c*) Dans le cas de compagnies d'assurance, certificat de paiement ou de cession de droits du propriétaire; dépôt en outre au tribunal, à titre de garantie de procédure, de cinq cents (500) dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en monnaie locale, à la date du dépôt. Seront acceptés à titre de dépôt à ces fins des espèces, garanties bancaires, polices d'assurance, ou garanties réelles sur immeubles.

3. La personne présentant la réclamation demandera, personnellement ou par voie d'avocat, aux autorités judiciaires du territoire où se trouve le véhicule qu'il soit recherché et saisi, sur la base de la documentation présentée, et elle décrira, si

¹ Entré en vigueur le 30 octobre 1990, dès que les Parties se furent informées (les 30 novembre 1989 et 30 octobre 1990) de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises, conformément à l'article VIII.

elle le peut, la personne en possession de laquelle le véhicule se trouve, en indiquant ses nom et adresse.

4. Sur réception de la demande, le juge ordonnera la saisie immédiate du véhicule et sa remise à la garde de l'autorité douanière locale. Le dépôt en douane sera fait moyennant inventaire, et le véhicule ne pourra en aucun cas être remis à une des Parties du litige, ni à un tiers, en qualité de dépositaire judiciaire.

5. Une fois le véhicule saisi, le juge signifiera au défendeur d'avoir à présenter, dans un délai ferme de trois (3) jours ouvrables, les documents d'origine attestant son droit sur le véhicule. Seuls les papiers d'importation en bonne et due forme du véhicule et les papiers d'exportation en bonne et due forme délivrés par la douane du pays d'origine seront admis à titre de preuve.

6. Sans préjudice du déroulement de la procédure, le juge demandera à l'autorité douanière de bien vouloir lui fournir dans un délai de vingt (20) jours des renseignements sur l'entrée du véhicule.

7. Passé le délai visé au paragraphe 5, le juge décidera, au cours d'une procédure sommaire, de la personne à qui, en droit, doit être remis le véhicule.

8. La procédure de recouvrement du véhicule devra être menée avec la plus grande célérité, conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle se déroule. L'autorité judiciaire veillera à ce que l'enquête soit menée avec toute la rapidité nécessaire. Elle n'admettra pas d'autres moyens de défense que ceux prévus dans le présent Accord, ni des manœuvres dilatoires et le juge devra, dans tous les cas, remédier au mieux aux défauts de la procédure, dans l'intérêt des Parties.

9. Lorsque la sentence faisant droit à la demande sera ferme, le juge ordonnera la restitution du véhicule à son propriétaire, à toute personne se substituant à lui ou à son représentant, directement ou par l'intermédiaire des autorités consulaires, douanières ou policières de la Partie dont celui-ci est un national.

Article III

1. Le véhicule automoteur terrestre originaire ou en provenance de l'une des Parties, qui aura été trouvé ou saisi par les autorités de l'autre Partie, ou dénoncé comme introduit en contrebande par une personne quelle qu'elle soit, et qui n'aura pas de papiers prouvant la propriété ou l'origine, sera remis immédiatement à la garde de l'autorité douanière du territoire sur lequel il a été trouvé, moyennant l'établissement d'un acte de remise ou d'inventaire.

2. Lorsqu'elle aura reçu le véhicule, l'autorité douanière demandera par écrit à l'autorité consulaire de l'autre Partie, dans un délai de trois (3) jours, que lui soient transmis, dans un délai de vingt (20) jours, des renseignements sur l'existence éventuelle dans les registres de police de mentions ayant trait à des dommages ou à un vol dudit véhicule sur le territoire dont il provient. L'autorité qui recevra cette demande est tenue, en outre, d'informer le propriétaire présumé du véhicule de sa saisie sur le territoire de l'autre Partie et de lui indiquer la procédure à suivre pour le récupérer. L'inobservation de ces conditions entraînera l'annulation de toutes les décisions postérieures.

3. Sans préjudice de la consultation visée au paragraphe précédent, l'autorité douanière procédera à la publication, à cinq (5) reprises en dix (10) jours, dans un organe officiel ou dans un journal de grande diffusion du pays, d'annonces invitant

les intéressés à faire valoir leur droit dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la dernière publication. Les annonces feront mention de toutes les caractéristiques permettant d'identifier le véhicule, telles que marque, modèle, couleur, numéro de moteur et de châssis, etc.

4. Une fois reçue la réponse officielle concernant l'origine délictueuse du véhicule, les formalités seront suspendues pendant vingt (20) jours, délai durant lequel le propriétaire, toute personne se substituant à lui, son représentant, l'avocat désigné ou l'autorité consulaire de la Partie dont il est un national, présenteront les documents pertinents. Après réception de ces derniers, l'autorité douanière procédera, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à la remise du véhicule au propriétaire, ou à toute personne se substituant à lui ou à son représentant, directement ou par l'intermédiaire des autorités consulaires, douanières ou policières de la Partie dont il est un national et délivrera à l'intéressé le certificat pertinent.

5. Au cas où elle n'aura pas reçu de réponse officielle dans le délai de vingt (20) jours et où les intéressés n'auraient pas fait valoir en temps voulu leur droit sur le véhicule remis à sa garde, l'autorité douanière adoptera les mesures prévues à ce sujet dans son code douanier.

6. Si un acte ou une décision quelconque de l'autorité administrative est soumis à l'autorité judiciaire compétente, la procédure sera régie par les règles prévues dans le présent Accord.

Article IV

La décision prise en première instance pourra faire l'objet d'un recours présenté sans autre formalité dans un délai ferme de trois (3) jours ouvrables à l'instance supérieure, laquelle devra se prononcer à titre définitif dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.

Article V

S'il existe des indices permettant de penser que le numéro de la voiture a été maquillé ou que des pièces permettant de l'identifier ont été remplacées, le juge devra demander le concours d'un expert, sans préjudice de la faculté des Parties, de proposer elles aussi leurs experts respectifs. Il devra être proposé des experts agréés, qui pourront être habilités par l'entreprise ayant fabriqué le véhicule objet de l'expertise. Dans tous les cas, les experts devront remettre leurs rapports respectifs dans un délai de trois (3) jours ouvrables. Ces rapports devront être fondés sur les données relatives à l'identification du véhicule fournies par le fabricant, qui seront présentées au juge après légalisation par le Consulat du pays d'origine du véhicule.

Article VI

Il est entendu que tous les délais prévus dans le présent Accord sont considérés comme des délais de procédure de caractère judiciaire.

Pour les délais qui n'ont pas été fixés dans le présent Accord, on observera dans tous les cas les délais les plus courts prévus dans la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la procédure.

Article VII

Toutes les mesures judiciaires ou administratives ayant trait au vol ou aux dommages subis par des véhicules originaires ou en provenance du territoire de

l'une des Parties et trouvés sur celui de l'autre, en cours ou devant être prises à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, seront régies par les dispositions de ce dernier.

Article VIII

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties se seront communiquées l'une l'autre, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans chacune d'elles pour son approbation. Chaque Partie pourra le dénoncer par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet le dernier jour du mois suivant celui de la notification à l'autre Partie.

FAIT à Ituzaingó, province de Corrientes, République argentine, le 26 avril 1989, en deux exemplaires originaux, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République argentine :

[Signé]

DANTE MARIO CAPUTO

Pour le Gouvernement
de la République du Paraguay :

[Signé]

LUIS MARIA ARGAÑA
